



Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general
10 de julio de 2014
Español
Original: inglés

Comité de los Derechos del Niño 61º período de sesiones

Acta resumida de la 1734ª sesión

Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el viernes 21 de septiembre de 2012, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zermatten

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes (*continuación*)

Segundo informe periódico de Andorra

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único, que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.12-46062 (EXT)



* 1 2 4 6 0 6 2 *

Se ruega reciclar 



Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)

Segundo informe periódico de Andorra (CRC/C/AND/2; CRC/C/AND/Q/2 y Add.1)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Andorra toma asiento a la Mesa del Comité.*

2. **El Sr. Villaverde** (Andorra) dice que la actual crisis económica ha repercutido de manera muy directa sobre los grupos más vulnerables del país y, en especial, en los niños. El aumento de los casos sociales, así como los fuertes recortes presupuestarios son los temas principales con los que se desayunan muchos de los gobiernos del ámbito europeo y Andorra no es una excepción. Frente a esos retos, el Gobierno ha duplicado con creces el personal dedicado a la infancia en riesgo, pasando de 5 profesionales en 2009 a 11 en 2012, entre trabajadores sociales y psicólogos, sin practicar hasta la fecha reducción alguna en los presupuestos destinados a los niños. Tras el período de inestabilidad política que ha atravesado el país, la Comisión Nacional para la Infancia, establecida en 2005, ha empezado finalmente a cumplir el mandato de mejorar la vida de los niños, con el apoyo del actual Gobierno, coordinando todas las políticas en esa materia y las medidas de seguimiento de las recomendaciones del Comité.

3. En cuanto a la recomendación de que Andorra cree una base de datos relativa a la infancia, indica que el Ministerio de Salud y Bienestar ha firmado recientemente un convenio de colaboración con la Fundación Julià Reig para que esta elabore de manera independiente un estudio sobre el estado de la infancia y la adolescencia en Andorra. Dicho estudio servirá para desarrollar una base de datos *ad hoc* y sus resultados permitirán al Ministerio avanzar aún más en la formulación de políticas preventivas y en la reorganización de prioridades. En estos momentos, el Ministerio está trabajando en un proyecto de "Historia social compartida", con la finalidad de crear una base de datos conjunta a nivel nacional, que comprenderá sectores como la salud, el bienestar, la educación y la economía y de volcar todos los datos en un solo instrumento recopilatorio. Además, está preparando un proyecto de ley con el objetivo de reordenar el sistema de servicios sociales de forma más eficaz y coordinada.

4. El hecho de no disponer de una ley específica para los niños en Andorra no presupone que la ley desatienda o ignore a esos colectivos. Además de la Convención y su Protocolo facultativo, así como de otros instrumentos internacionales de los cuales Andorra es parte, hay muchas leyes nacionales, como la Ley cualificada de la adopción y las otras formas de protección del menor desamparado, que permiten al Gobierno dar respuesta a las necesidades de la infancia y la juventud en riesgo. Hay que reconocer que las dimensiones del país, con una población de menos de 80.000 habitantes, ayudan al Gobierno a afrontar los problemas en torno a la infancia con celeridad y eficacia, dada la escasa burocracia, y a asegurar un contacto muy directo con todos los profesionales dedicados a la infancia, como psicólogos, trabajadores sociales, maestros, fiscales, jueces, etc. Esas personas pueden tomar a su vez medidas en plazos breves para resolver casos urgentes en situaciones como la de los menores desamparados o víctimas de malos tratos o abusos. A pesar de que Andorra pueda contar con los mismos problemas que afectan a la infancia en cualquier otro país de mayor tamaño, las estadísticas de la Fiscalía General, distribuidas a los miembros del Comité, demuestran que esos problemas existen en Andorra a una escala mucho más reducida.

5. El Gobierno de Andorra ha presentado recientemente al Parlamento un proyecto de ley con miras a modificar el Código Penal a fin de adecuarlo al Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, así como al Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Una vez aprobado ese proyecto, el Gobierno tomará medidas para ratificar el Protocolo facultativo antes de 2012. Le complace informar al Comité de que el Gobierno ha adoptado hace solo dos días la decisión de que el Primer Ministro firme el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, cuando asista al sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General. El Gobierno ha firmado también recientemente la carta de compromiso con la supervivencia infantil de los países que formarán parte de la campaña impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), titulada "Una promesa renovada".

6. Finalmente, desea explicar que el retraso en la presentación del informe periódico del Estado parte se ha debido principalmente al continuo trasiego del personal técnico dedicado a su preparación, habida cuenta de la multiplicidad de funciones que debe asumir una administración tan pequeña como la de Andorra. Aún así, el Gobierno se ha esforzado por contar con la colaboración de todos los actores vinculados con la infancia y recoger el máximo de datos actualizados al respecto. Desea proponer al Comité que el próximo informe sea el informe periódico combinado tercero a quinto, a principios de 2018, lo que le permitirá adaptarse a las fechas previstas en la Convención, sin que se produzcan más retrasos.

7. **El Sr. Cardona Llorens** (Relator para el país) alaba la decisión del Estado parte de firmar el Protocolo facultativo, así como sus esfuerzos por cumplir las recomendaciones del Comité en materia de protección de los derechos del niño, incluidos los que padecen alguna discapacidad. Desearía saber qué agentes del Gobierno han participado en la redacción del informe y si la sociedad civil ha desempeñado algún papel. Toma nota con satisfacción de las numerosas iniciativas adoptadas desde la presentación del anterior informe, incluida la mejora de la recopilación de datos, a pesar de los múltiples retos planteados, como el escaso número de profesionales y los problemas de coordinación. Desea saber qué medidas se están adoptando para promover una mayor coordinación de las políticas entre los diferentes departamentos interesados. Según una de las anteriores recomendaciones del Comité, el Estado parte debe elaborar una estrategia o un plan nacional de acción de carácter amplio para la infancia, que servirá para fomentar esa coordinación. Agradecería disponer de más información sobre la posibilidad de que se haya contemplado la preparación de una estrategia o plan de esa índole.

8. Aunque le complace la noticia de que no se han registrado recortes presupuestarios en la esfera de la protección de los niños, a pesar de la actual crisis, le preocupa la expresión "hasta la fecha" que ha oído en la declaración introductoria. Desea saber, por tanto, qué disposiciones se han tomado para prestar unos servicios sociales básicos sostenibles y garantizar que no se requieran reducciones en el futuro. Además, no ha quedado claro si el Gobierno ha asignado capítulos específicos del presupuesto a los niños. Si así fuera, agradecería conocer más detalles de esas partidas presupuestarias.

9. Se pregunta por qué los niños no han interpuesto ninguna denuncia de violación ante la Oficina del mediador *Raonador del Ciutadà*, pese a las actividades realizadas para dar a conocer la Convención a la opinión pública. ¿Son los niños conscientes de sus derechos? Observa con preocupación que la edad mínima de consentimiento para el matrimonio sigue estando en 16 años y que los adolescentes en Andorra pueden casarse con la autorización de un juez con tan solo 14 años, lo que no es una edad apropiada para el matrimonio. Pregunta por qué no se ha elevado esa edad a 18 años. Agradecería también información sobre las medidas adoptadas para promover la igualdad entre niños y niñas y erradicar los estereotipos. Pregunta asimismo si se ha llevado a cabo algún estudio sobre esos estereotipos y, en caso afirmativo, qué disposiciones se han tomado para corregir dichas pautas.

10. Habida cuenta de que no existe ninguna ley específica que plasme los derechos del niño, no queda claro cómo puede incorporarse el importante principio del interés superior del niño a la legislación pertinente. Agradecería que se le informara de cualquier sentencia judicial en que se haya mencionado el interés superior del niño. Además, es preciso explicar qué criterios se utilizan para evaluar el interés superior del niño con arreglo a la ley; ¿se ha especificado algún criterio de esa índole o queda el principio a discreción de la autoridad judicial que toma la decisión?

11. Pregunta qué medidas se han adoptado para proteger la privacidad de los niños e impedir que se vean expuestos a contenidos perjudiciales en Internet. No se sabe a ciencia cierta si existe algún órgano que aborde en principio los delitos que entrañan una vulneración de la privacidad de los niños. Toma nota también con preocupación de que no hay una ley específica que abarque todas las formas de castigos corporales. Expresa, por último, su inquietud ante el incremento de los casos de violencia doméstica a la luz de la actual situación económica, ya que no es probable que la crisis toque pronto a su fin y dado que los niños de familias de bajos ingresos corren un riesgo especial. Sería útil, por tanto, hacerse una idea más concreta del número de trabajadores sociales y psicólogos infantiles que trabajan en los *comuns* (administraciones comunales) de todo el país.

12. **La Sra. Nores de García** pregunta qué disposiciones se han adoptado a fin de garantizar un acceso universal y equitativo a todos los servicios públicos, como la atención de salud y la educación, también para los hijos de los trabajadores de temporada en Andorra. Se pregunta qué está haciendo el Estado parte con objeto de combatir la discriminación generalizada contra las niñas y fomentar la aceptación de otras culturas, lenguas y costumbres. Desearía saber si la Comisión Nacional para la Igualdad dispone de recursos humanos y financieros adecuados. Sería útil contar con datos acerca de alguna actividad de sensibilización referente a los efectos nocivos de los castigos corporales. Agradecería, por último, recibir información sobre las formas de protección dispensada a los niños, teniendo en cuenta los efectos adversos de la actual crisis, en particular, sobre los más vulnerables.

13. **El Sr. Guráñ**, tras observar que Andorra aún tiene que crear una institución nacional de derechos humanos, solicita información acerca del número de denuncias recibidas por el *Raonador del Ciutadà* y las respuestas que se han dado. ¿Cómo concienciar al público respecto de la posibilidad de presentar una denuncia ante el *Raonador del Ciutadà*? También desearía saber si existe un parlamento de los niños en Andorra y hasta qué punto participan los niños en la adopción de decisiones en la escuela y el *comun*.

14. **El Sr. Koompraphant** señala que, a pesar de que Andorra posee una amplia legislación relativa a la infancia, no existe ninguna ley específica de protección de los niños contra la violencia doméstica. Desea saber cuáles son las salvaguardias aplicables para prevenir el maltrato en el hogar y qué medidas de intervención temprana, como las amonestaciones, las órdenes judiciales y los programas educativos, contempla la ley para los padres, tutores legales u otras personas que tienen la custodia de niños y que abusan de ellos.

15. **El Sr. Pollar** elogia el respeto que el Estado parte profesa al artículo 6 de la Convención, relativo al derecho a la vida, incluida la abolición de la pena de muerte en el país; le inquieta, sin embargo, que todavía haya niños que mueren en Andorra antes de cumplir los 5 años, porque la muerte de un solo niño suscita una honda preocupación en el Comité. Tras tomar nota de las estadísticas que figuran en el párrafo 212 del informe sobre el período 2002-2006, pregunta qué disposiciones se han adoptado para evitar el fallecimiento de niños en accidentes de tráfico o por cometer suicidio.

16. Pasando al artículo 14 de la Convención sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión, observa que uno de los jefes del Estado de Andorra es un obispo; se

pregunta, por consiguiente, si el Estado parte ha tenido que afrontar algún conflicto en la vida cotidiana de sus ciudadanos en relación con el artículo 14. Agradecería mayor información sobre la enseñanza de la religión en las escuelas y, en especial, si la asignatura de religión es obligatoria, si la educación religiosa está subvencionada por el Estado y, en caso afirmativo, si algunas religiones reciben un trato más favorable que otras, si la intimidad de los niños goza de protección en el caso de que decidan no asistir a clase de religión y, por último, si la religión figura entre las materias evaluables para obtener el certificado de fin de estudios.

17. **El Sr. Kotrane** acoge complacido la cobertura que ha recibido en el informe una amplia gama de sectores, pero advierte que se ha otorgado muy poca atención a algunas cuestiones, como la protección de los niños, que abarcan aspectos tan importantes como el sistema de justicia juvenil, el trabajo infantil, la explotación y la violencia sexual y la trata de niños. Le ha sorprendido el hecho de que esas cuestiones se han despachado en una página en un informe que contiene más de 100. Como ha observado que Andorra ha adoptado un enfoque monista del derecho, pregunta si se ha dado el caso de que algún juez haya aplicado la Convención. Pide también que se le aclare la relación del Estado parte con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se le indique si en Andorra se aplican los convenios o instrumentos normativos de la Organización, pese a no ser miembro de ella.

18. **La Sra. Sandberg** señala que la renuencia del Estado parte a elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio parece indicar una falta de entendimiento del concepto de infancia y de los derechos consagrados en la Convención. Sería útil saber si el Estado parte lo ha tomado en consideración o si hay razones subyacentes para no elevar el límite de edad.

19. **El Sr. Gastaud** pregunta si está funcionando el observatorio social encargado de recopilar datos sobre los niños y la familia, mencionado en el párrafo 121 del informe y, en ese caso, si ha publicado alguna conclusión. Agradecería información sobre los recursos judiciales o administrativos de que disponen los niños que no han sido escuchados en los procedimientos que les afectan. El Comité agradecería también más información sobre las funciones y competencias del Consejo General de la Juventud: ¿ha colaborado con alguna entidad estatal hasta la fecha?

20. **La Sra. Wijemanne** pregunta si los niños pueden presentar denuncias ante el *Raonador del Ciutadà* y, en tal caso, si conocen que les asiste ese derecho. Convendría saber si hay algún otro mecanismo de denuncias al alcance de los niños. El Comité agradecería recibir más información sobre la Comisión Nacional para la Infancia y, en particular, si es independiente. Pregunta si el Ministerio de Salud se encarga de la coordinación de la Comisión y cómo funciona. Sería interesante contar con datos sobre la violencia de género que afecta a las niñas en el Estado parte. Pregunta qué asistencia se presta a las niñas que se quedan embarazadas a consecuencia de una violación.

21. **La Sra. Varmah** pregunta si el Estado parte tiene constancia de algún niño que haya nacido en Andorra, pero que no haya sido inscrito en el registro. Desea saber qué medidas se toman si el nacimiento no se registra en el plazo establecido.

22. **El Presidente** insta al Estado parte a ratificar lo antes posible el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual y a estudiar la posibilidad de ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia.

Se suspende la sesión a las 11.05 horas y se reanuda a las 11.35 horas.

23. **El Sr. Villaverde** (Andorra) dice que, si bien la sociedad civil no ha participado en la preparación del informe periódico, no se escatimaron esfuerzos para consultar a las ONG y a los colaboradores sociales durante la preparación de los anteriores informes. No

obstante, es cierto que el Gobierno necesita buscar mecanismos para vencer la reticencia de la sociedad civil a manifestar abiertamente su opinión y la tendencia del Gobierno a consultar solo a los ministerios y *comuns*.

24. La Comisión Nacional para la Infancia es el organismo clave para coordinar todos los esfuerzos destinados a promover y proteger los derechos del niño en Andorra. Su objetivo reside en fijar un orden de prioridades, garantizar la comunicación con las ONG y tomar la iniciativa en el seguimiento de las observaciones finales del Comité. La Comisión Técnica de Atención al Menor existe efectivamente, pero su mandato es mucho más reducido que el de la Comisión Nacional para la Infancia. Es de esperar que la Comisión estará funcionando a pleno rendimiento a finales de 2012.

25. **El Presidente** pregunta qué competencias tendrá la Comisión y qué recursos financieros se le asignarán.

26. **La Sra. Gesse** (Andorra), en respuesta a las preguntas formuladas en torno a la protección de la infancia, indica que el equipo especializado en protección infantil interviene en situaciones de riesgo para los niños y los jóvenes o de falta de protección. Dado que se ha duplicado con creces el número de personal, el equipo ha estado trabajando también sobre la forma de potenciar el bienestar de los niños y adolescentes, independientemente de su situación. Se ha creado una subcomisión que desarrolla actividades en las escuelas, a fin de sensibilizar a los alumnos y profesores respecto de los posibles peligros para el bienestar de los niños. En los casos de sospecha de abusos o malos tratos físicos a los niños, los equipos intervienen en el plazo de 24 horas; en 48 horas, los tribunales y la policía se ponen en marcha y, a más largo plazo, se aborda el trabajo con la familia del niño, a fin de poner término al abuso y comprobar si el niño puede permanecer sin problemas en el entorno familiar. Los psicólogos de los equipos se ocupan de valorar el nivel de riesgo que afronta el niño y si debe ser alejado o no de su familia. En los casos necesarios, los tribunales emiten órdenes de protección y el niño pasa a los servicios de acogida.

27. **El Sr. Cardona Llorens** dice que el Comité agradecería recibir más información sobre la Comisión Nacional para la Infancia y qué mandato tiene para informar a los ministerios y *comuns* sobre las iniciativas que deben tomar. Pregunta si en la Comisión figuran representantes de todos los departamentos del Gobierno y *comuns*.

28. **El Sr. Villaverde** (Andorra) explica que la Comisión estará compuesta por representantes de todos los sectores interesados en la esfera de los derechos del niño, que abarcan la salud, la educación, la asistencia social, la policía, la justicia y la cultura, el Consejo General de la Juventud y, posiblemente, los medios de difusión. En 2013 se asignará a la Comisión un presupuesto propio.

29. **El Sr. Forner** (Andorra) dice que el Gobierno es consciente de la necesidad de modificar la ley sobre la edad mínima para contraer matrimonio. El hecho de haberla fijado en menos de 18 años no denota una falta de entendimiento del concepto de infancia. La ley específica es anacrónica y se modificará sin lugar a dudas en el futuro. Se aprobó en un principio para garantizar que no se considerase que las niñas menores de 18 años que dieran a luz eran culpables de un delito.

30. No se ha comunicado ningún caso de discriminación que afecte a los hijos de los trabajadores de temporada, cometido por oficiales de policía de Andorra. No se ha hecho referencia en el informe periódico a la aplicación de los Protocolos facultativos de la Convención porque se han presentado sendos informes sobre la aplicación de esos instrumentos, que fueron examinados por el Comité en 2006. Su Gobierno ha firmado unos 20 Convenios del Consejo de Europa, incluido el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual. Tiene previsto ratificar ese instrumento antes de finales de 2012. Antes de convertirse en un Estado independiente en 1994, Andorra había

ratificado unos 246 instrumentos de derechos humanos, lo que representa una tarea ingente en términos de aplicación y presentación de informes.

31. Andorra no se ha adherido a la OIT, debido simplemente a la falta de recursos. Las autoridades están pendientes, sin embargo, de los convenios y recomendaciones y han incorporado gran parte de las disposiciones que contienen a la legislación nacional. Varias leyes de Andorra incluyen normas destinadas a prevenir las desigualdades de género y eliminar los estereotipos. Las leyes relativas al matrimonio y a las relaciones laborales estipulan que ambos progenitores tienen la misma responsabilidad en la crianza de los hijos. Tras la sexta semana de licencia por maternidad, cada pareja es libre de decidir cuál de los dos miembros disfrutará del resto de la licencia parental disponible.

32. **El Sr. Cardona Llorens** pregunta qué medidas se han tomado para evaluar los resultados de los loables esfuerzos del Gobierno por mejorar la igualdad de género en el Estado parte.

33. **La Sra. Aidoo** pregunta si la Comisión Nacional para la Igualdad está funcionando y si dispone de recursos suficientes con miras a aplicar el Plan de Acción Nacional para la Igualdad. Sería útil saber si la Comisión ha desarrollado estrategias destinadas a luchar contra las desigualdades que afectan a las niñas y a las mujeres y a otros grupos.

34. **El Sr. Villaverde** (Andorra) señala que el Gobierno ha realizado importantes progresos en sus esfuerzos por recopilar datos y analizar los resultados de todos sus programas y estrategias sociales. Informará al Comité del fruto de esos esfuerzos en su próximo informe periódico.

35. La legislación sobre sus trabajadores de temporada no reconoce el derecho a la reunión familiar. Por ello, si las personas que acuden a trabajar a Andorra durante la temporada de esquí se llevan a sus hijos con ellos, esos niños no gozan de un derecho directo a la atención de salud y a la educación. En la práctica, sin embargo, en esos casos prevalece siempre el interés superior del niño, de forma que todos los niños tienen garantizado el disfrute de esos derechos. El Gobierno espera modificar la legislación pertinente en el futuro.

36. **El Presidente** dice que no comprende por qué no se reconoce en la legislación del Estado parte el derecho a la atención de salud y a la educación de los hijos de los trabajadores de temporada, dado que esos derechos se respetan en la práctica.

37. **El Sr. Forner** (Andorra) aclara que los trabajadores de temporada, que en su mayoría permanecen en Andorra seis meses como máximo, no tienen derecho a la reunión familiar. Sin embargo, los artículos 20 y 30 de la Constitución garantizan el acceso a la educación y a la atención de salud.

38. **El Presidente** afirma que el Estado parte debe resolver la cuestión de la reunión familiar, ya que todos los niños, independientemente de las circunstancias o de la condición jurídica de sus padres, han de beneficiarse del acceso a la salud y a la educación.

39. **La Sra. Nores**, tras observar que el hijo de un trabajador migrante necesita haber residido tres años en el país para adquirir el derecho a la escolarización, dice que si los trabajadores de temporada llevan con ellos a sus hijos, no se les debe discriminar a causa de las circunstancias en que se hallan sus padres.

40. **El Sr. Forner** (Andorra) dice que su país experimenta una afluencia masiva de trabajadores migrantes durante la temporada anual de esquí. Es preciso adoptar normas restrictivas, ya que de lo contrario, Andorra no podría hacer frente al aumento de la población temporal y a los costes conexos. El Estado parte no puede pedir a sus contribuyentes que asuman la carga financiera de sufragar el acceso de los migrantes a los

servicios. Aunque el planteamiento parece restrictivo, las disposiciones de la Constitución protegen los derechos de los niños.

41. **La Sra. Mingorance** (Andorra) dice que el Código Penal prohíbe en Andorra la violencia física o psicológica o cualquier otro trato humillante. Esos delitos están castigados con tres años de prisión como máximo, pudiéndose imponer penas adicionales en los casos de maltrato físico o psicológico del niño, teniendo en cuenta que la edad de este constituye una circunstancia agravante.

42. **La Sra. Nores** pregunta qué programas de sensibilización o de movilización social existen para informar a las comunidades, niños, familias y a la sociedad civil acerca del impacto perjudicial de los daños corporales y promover un comportamiento positivo.

43. **El Presidente**, tras indicar que los castigos corporales no están prohibidos explícitamente en la legislación de Andorra, y recordando las recomendaciones formuladas en relación con la Carta Social Europea, dice que esa práctica abarca no solo la violencia física, sino también el uso de la fuerza, las amenazas o las humillaciones para disciplinar a un niño.

44. **El Sr. Cardona Llorens** señala que no está sugiriendo que la utilización de la violencia contra los niños sea un problema generalizado en Andorra. No obstante, si bien entiende que existen disposiciones generales para prevenirla, el Comité desea saber si esa violencia está expresamente prohibida en todos los ámbitos de la legislación y la política nacional mediante disposiciones destinadas a prevenir todos los tipos de violencia, incluidos los castigos corporales, así como campañas para eliminar los estereotipos y medidas para sensibilizar y modificar las actitudes en la escuela, la familia y todos los aspectos de la vida.

45. **La Sra. Mingorance** (Andorra) dice que las disposiciones de la legislación nacional cubren todos los tipos de violencia y los tratos humillantes a los niños. Existe un corpus de jurisprudencia en ese ámbito que incluye estadísticas sobre los resultados de los casos que llevan aparejada la violencia contra los niños. A pesar de que el Código Penal no contiene ninguna prohibición explícita de los castigos corporales, no cabe duda de que el principio se aplica en la práctica. Si bien suelen ser los médicos de familia los que denuncian los casos a la justicia, los niños también tienen la posibilidad de interponer denuncias llamando a una línea de teléfono gratuita o poniéndose en contacto con la policía. La delegación puede proporcionar estadísticas al Comité sobre los casos y las correspondientes sentencias judiciales. Existen diferentes medidas de protección en los casos de abuso en el entorno familiar, que dependen de la naturaleza del abuso. Por ejemplo, las autoridades pueden retirar la custodia, tras lo cual un juez de un tribunal de menores decidirá las medidas que deben tomarse, incluida la prestación de apoyo psicológico. Posteriormente, se previene al Departamento de Asistencia Social a la Infancia, que tiene acceso a los recursos necesarios para proteger a esos niños.

46. Se han adoptado medidas para proteger el interés superior del niño en los procedimientos judiciales. Los jueces analizan cada caso por separado, teniendo en cuenta la información obtenida gracias a la evaluación psicológica del niño y a los resultados de las entrevistas con este último y sus parientes o allegados. Cabe apelar contra las sentencias judiciales, incluso alegando que no se ha respetado como es debido el interés superior del niño.

47. **El Sr. Cardona Llorens** pregunta si, en lugar de las garantías procesales de índole general, existen en Andorra criterios jurídicos establecidos en materia del interés superior del niño, que se ajusten a las directrices del Consejo de Europa y que los jueces están obligados a tener en cuenta, o si los jueces determinan por sí mismos cuál es el interés superior del niño.

48. **La Sra. Mingorance** (Andorra) explica que los jueces han de justificar sus decisiones tras valorar todos los aspectos de cada caso. Esas decisiones, y los razonamientos que las sustentan, pueden ser objeto de apelación o revisión.

49. **El Sr. Cardona Llorens**, en referencia a la situación de los niños separados de sus familias, señala a la atención los informes sobre los problemas relacionados con la asistencia prestada en las residencias y otras instituciones y pregunta qué medidas se han tomado para hacer frente a las necesidades de esos niños. Desea saber si el Estado parte proporciona financiación a las organizaciones que respaldan esos centros.

50. Acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado parte para promover la inclusión social de los niños con discapacidad, pero expresa su preocupación por el impacto de la crisis económica. Pregunta qué disposiciones se han adoptado para mantener los niveles presupuestarios pertinentes, en especial en lo tocante a la educación, el suministro de personal de apoyo y las actividades de esparcimiento.

51. Aunque aplaude los esfuerzos del Estado parte para afrontar el tema del trabajo infantil, le preocupan las disposiciones legislativas que permiten a los niños realizar un "trabajo liviano" durante un máximo de seis horas al día. Desea saber qué se entiende por "trabajo liviano".

52. Respecto del tema de la justicia juvenil, pregunta si se han adoptado procedimientos especiales para los casos de infractores juveniles y solicita información sobre las medidas alternativas. Tras poner de relieve las preocupaciones suscitadas por el caso de un niño detenido en un centro de adultos, aunque estaba acompañado por una persona mayor de edad, pregunta si el Estado parte proyecta crear un centro de detención especial para niños. ¿Cómo enfoca el Estado parte el tema de los niños en el sistema penitenciario? ¿Existe un acuerdo con España sobre la asistencia a los niños privados de libertad?

53. **El Sr. Pollar** señala a la atención el artículo 11 de la Convención y pregunta qué disposiciones se han tomado para establecer un organismo encargado de aplicar la Convención y, en el caso de que se hubiera establecido dicho organismo, si ya está operativo. Se pregunta si el Estado parte cuenta con datos sobre los niños objeto de traslados ilícitos o de retención ilícita en el extranjero, con arreglo a lo establecido en esa disposición de la Convención, y si algún extranjero o ciudadano de Andorra ha interpuesto alguna denuncia en ese sentido, en virtud de dicho instrumento. ¿Cuál es la situación en lo tocante a los derechos de visita?

54. El Estado parte necesita normalmente presentar información de seguimiento acerca del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. En sus anteriores observaciones finales, el Comité pidió a Andorra que tipificara como delito el reclutamiento de niños soldados, por lo que el orador desea saber si se ha hecho efectiva esa recomendación.

55. Tras alabar el apoyo que el Estado parte presta al Protocolo facultativo, pregunta qué nuevas iniciativas se han emprendido que puedan servir de ejemplo de buenas prácticas para otros Estados partes. En las observaciones finales publicadas a raíz del examen del informe inicial de Andorra en virtud del Protocolo facultativo (CRC/C/OPAC/AND/CO/1), el Comité pidió al Estado parte que proporcionara información sobre los niños refugiados en Andorra que hubieran podido participar en hostilidades en su país de origen (párr. 8) y recomendó que se diera la máxima difusión pública a las observaciones finales y a las respuestas por escrito (párr. 10). Solicita información sobre los progresos realizados en ese sentido y pregunta si Andorra pertenece al grupo de países que se han movilizado para prohibir el reclutamiento de niños soldados.

56. **La Sra. Maurás Pérez**, tomando la palabra para hablar del trabajo infantil, en especial en la industria turística, señala que no se han disipado las preocupaciones relativas

a la participación tradicional de los niños en ciertos tipos de trabajos. Aunque tiene entendido que la situación está ahora más vigilada, el hecho de que se permita a los niños trabajar un máximo de seis horas al día significa que carecen de un acceso adecuado a la educación y de tiempo para jugar y para el esparcimiento. ¿Qué está haciendo el Estado parte para controlar eficazmente las actividades de los niños y está regulada por el Estado la participación de los niños en la industria turística? Desea saber si existe un código de conducta y solicita información sobre el marco jurídico vigente en ese ámbito.

57. **La Sra. Sandberg** desea saber, habida cuenta de los recientes informes que indican que los servicios de protección de la infancia tienen una escasa dotación de personal y una carga de trabajo excesiva, si el Estado parte piensa que el sector dispone de un personal adecuado. Es imprescindible contar con los efectivos necesarios para tratar los casos y proporcionar el nivel de atención adecuado. ¿Tienen obligación las escuelas, el personal médico u otros servicios de denunciar los casos de abuso o negligencia a los servicios de protección de la infancia? Desea saber también qué mecanismos existen, como por ejemplo, las técnicas especiales de entrevista, para proteger a los testigos y víctimas menores de edad en el entorno judicial.

58. **El Sr. Koompraphant**, tomando la palabra sobre el tema de las modalidades de atención alternativa, pregunta si las familias de acogida constituyen una opción para los niños separados de sus familias. Solicita información sobre la manera en que el Gobierno recluta a las familias voluntarias idóneas, con las aptitudes indispensables para criar a los niños, el apoyo y la capacitación profesionales ofrecidos a las familias, el personal contratado para esa tarea y la preparación que los niños reciben antes de entrar en una familia de acogida. ¿Se están tomando iniciativas destinadas a trabajar con las familias para que puedan proporcionar los mejores cuidados posibles? Solicita asimismo información sobre las medidas adoptadas para prevenir el estrés en el hogar y en la escuela y pregunta si los niños tienen acceso a servicios de asesoramiento y de salud mental. Pregunta si los niños en conflicto con la ley tienen acceso a servicios de asesoramiento psicológico y si los tribunales disponen de información sobre el acceso a esos servicios.

59. **El Sr. Gastaud** dice que es menester elevar la edad de responsabilidad penal en el Estado parte, que está fijada actualmente en 12 años. Desea saber si los menores de 12 años disfrutaban de total impunidad. Dado que los presidentes de los tribunales serán los mismos tanto si han de juzgar a niños como a adultos, desea saber si se aplican sanciones diferentes en los casos en que están implicados niños en conflicto con la ley.

60. **La Sra. Aidoo** pregunta si el plan de estudios en los centros de enseñanza primaria y secundaria comprende la enseñanza de los derechos humanos y, en especial, de los derechos del niño, con referencia a la Convención y a la legislación nacional en la materia. Tras observar que el Estado parte dispone de un programa activo de capacitación en el servicio para los maestros, pregunta si estos reciben una formación acerca de los derechos del niño y de los derechos humanos en general.

61. **El Sr. Kotrane** dice que, en sus observaciones finales sobre el informe inicial de Andorra, de conformidad con el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el Comité pidió al Estado parte que tipificara explícitamente como delito todos los actos definidos en el Protocolo e incorporase sus disposiciones a la legislación nacional (CRC/C/OPAC/AND/CO/1, párr. 7). Como es habitual que el Estado parte facilite información sobre las medidas de seguimiento, solicita más datos acerca de los progresos realizados en relación con esa recomendación, en especial en lo tocante a la competencia de los tribunales en los casos que llevan aparejada la extradición y la doble incriminación.

62. **El Presidente** pregunta si los adolescentes tienen garantizada la confidencialidad de las consultas y de los métodos anticonceptivos, y qué medidas se han adoptado para limitar el acceso al alcohol u otras sustancias adictivas. Como el aborto no está autorizado en Andorra, desea saber qué disposiciones está tomando el Estado parte con objeto de afrontar problemas como el de los abortos ilegales o el del turismo médico relacionado con centros que practican abortos. Tras señalar a la atención las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como las derivadas del examen periódico universal del país, en el sentido de que el Estado parte necesita modificar su legislación en ese ámbito, pregunta si la situación ha cambiado en los últimos años.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.